

Prensa Obrera

POR UN PARTIDO OBRERO



Jueves
23 de abril
de 2020

Año XXXVII
N° 1.590

\$40
www.po.org.ar
www.prensaobrero.com
prensaobrera@gmail.com

Bartolomé Mitre 2162
C1039AAB
Ciudad de Buenos Aires

Editorial

La clase obrera
delibera y empieza
a actuar



MARIANO FERREYRA
LA LUCHA CONTINUA



HAY UNA



SALIDA

◆◆ PARA QUE LA CRISIS ◆◆
NO LA PAGUEN LOS TRABAJADORES

Se han generalizado en estos días las excepciones para sectores económicos y regiones geográficas. Pesan intereses económicos importantes que desean terminar con la cuarentena en sus zonas de influencia. Se está colocando en riesgo a franjas numerosas de la población en función del lucro capitalista.

Mientras tanto, la precariedad del sistema sanitario se evidencia en la extensión de casos entre sus profesionales. Y también en los fuertes brotes en geriátricos, que tendrían que ser los lugares más seguros para la población de riesgo.

Pasan las semanas y no ha habido una movilización de recursos significativos para reforzar el sistema sanitario.

La cuarentena también es incompatible con el hambre. Sin embargo, se mantienen los despidos y suspensiones a la baja. No se aumenta la ayuda alimentaria a los comedores populares. Millones han quedado fuera del Ingreso Familiar de Emergencia, y se sigue demorando su cobro para quienes han sido admitidos.

Quieren aprovechar la emergencia sanitaria para destruir los derechos de los trabajadores. Y abrir paso, de hecho, a la reforma laboral que vienen alentando.

Mientras tanto, ponen en juego la salud de la población en función de esta agenda.

Más que nunca, los comités obreros electos por los trabajadores, los mandatos a los cuerpos de

delegados para actuar, están en el orden del día. Defensa integral del salario, ningún despido, control obrero de la esencialidad y de las condiciones sanitarias donde la actividad sea imprescindible a las necesidades sociales, apertura de cuentas. Que la crisis no la pague el pueblo trabajador. Sólo afectando al gran capital y desconociendo la deuda externa podemos amasar los recursos que necesitamos para defender la vida de nuestro pueblo y abrir paso a una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales.

Por el camino de la lucha del frigorífico Penta, del paro de repartidores, de los reclamos de trabajadores de la salud y de la defensa de las condiciones de trabajo del sindicato del Neumático.

Las patronales van por más

Subsidio salarial, con plata de los jubilados

El nuevo DNU, que establece que el Estado asume buena parte del salario de abril, confirmó el fracaso del paquete anterior. Las patronales presionaron con despidos y una ola de suspensiones y rebajas salariales.

Aunque el aporte va directamente a la nómina salarial de cada empresa, en rigor se trata de un subsidio a los capitalistas; que además se hace a ciegas, sin meterse en los balances de las empresas para discriminar las que atraviesan realmente una crisis de las que no, las que carecen de espalda para cumplir sus compromisos salariales de aquellas que deberían apelar a sus millonarias reservas acumuladas.

El grueso de esos fondos, unos 107 mil millones de pesos, una vez más saldrá de la Anses; es decir de los bolsillos de los trabajadores activos y jubilados.

El nuevo decreto establece que el Estado se hace cargo del pago del 50% de los salarios privados, por un monto no menor a un salario mínimo (16.875 pesos) ni mayor a dos (33.750 pesos), o al salario neto de bolsillo. Eso se suma a la exención de aportes patronales. La caja exhausta del Sistema Integrado Previsional “pone” pero “no recibe”. La primera víctima de este doble saqueo será, previsiblemente, la movilidad jubilatoria de junio.

Además, es aplicable aún en los casos de suspensiones con rebajas salariales que habilitó el primer decreto. Una empresa del Smata, por ejemplo, que acordó rebajas al 70% del salario bruto, al tener subsidiada la mitad del importe que el trabajador cobró en febrero, puede terminar pagando el 20%.

El 75% de las empresas -unas 420 mil- se inscribió para recibir la asistencia. El nuevo programa mejora sustancialmente los valores y, fundamentalmente, alcanza a todas las empresas sin distinción de tamaño. Incluso extiende el plazo para que se inscriban las que no lo hicieron antes.

Suspensiones “a la baja”, subsidiadas

Para adherirse al nuevo programa, las patronales deberán demostrar, entre otras alternativas, una reducción de sus ventas. El criterio es generoso porque, con la economía detenida, la caída de la facturación es casi la norma. De este modo, en esa lista entran Ford, Toyota, Arcor, Paolo Rocca o Bulgheroni a igual título que cualquier Pyme.

Además, todos estos pulpos acordaron con “sus burocracias” suspensiones con rebajas salariales del orden del 30% (en la industria petrolera es mucho mayor), al amparo del artículo 223 bis de la

ley de Contrato de Trabajo, que el DNU de “prohibición de despidos y suspensiones” no cuestiona. Esta misma línea siguieron las cadenas de comida rápida, de electrodomésticos, las automotrices y varias actividades más: una “suerte de ronda de paritarias orientada a pactar licenciamientos masivos”.

A la luz del reciente decreto, Comercio y textiles pasaron a un cuarto intermedio las negociaciones. Incluso el sindicato de pasteleros, que acaba de firmar suspensiones al 70% con la cámara que agrupa a McDonald's, Burger King, Starbucks y otras, advirtió que revisará el acuerdo.

“Ahora que el Estado pondrá la mitad del sueldo, vamos a ir por el 100% del salario”, dice la CGT. Para la UIA “no es lógico ni racional. El que se queda en su casa no puede ganar lo mismo que el que trabaja. No es un salario, es una compensación”.

Se viene un tironeo por esto, aunque lo que realmente desvela a la CGT es el rojo de las obras sociales por la falta de aportes patronales. En los próximos días habrá una reunión con el ministro de Salud, Ginés, para destrabar un aporte sustancial. “O liberan la producción o tienen que dar asistencia”, declaró Héctor Daer.

Entre los sindicatos industriales se ha destacado la actitud del Sutna que, habiendo sido declarado actividad esencial con dudosos fundamentos,

ha resistido toda rebaja y la primera habilitación de actividades en Pirelli la ha hecho garantizando el salario integral neto de los que siguen licenciados. Una vez más, la actitud del clasismo contrasta con la burocracia sindical en todos los planos.

Los bancos mandaron la plata de los créditos al dólar

Diego Coatz, uno de los capos de la UIA, fue uno de los que reclamó más medidas, “contundentes y universales”, y rechazó “que se basen en el endeudamiento de las empresas”, en referencia a los malogrados créditos bancarios.

Los créditos al 24% no fueron otorgados por los bancos hasta que no aparecieron las garantías del Estado. Y, según la UIA, el 80% de los solicitantes aún no lo recibió. La mayor parte de los 150 mil millones de pesos adjudicados fue canalizada por los bancos oficiales. Los privados desviaron los encajes liberados por el Central hacia la compra de dólares.

Para los autónomos, una masa importante que quedó afuera de todo auxilio estatal, el nuevo decreto prevé una línea de créditos a tasa 0. Con una inflación del 50%, puede parecer beneficioso pero eso no debe ocultar que la ayuda “se basa en un mecanismo de endeudamiento” (el que rechazó la UIA).

Por una salida obrera

Todavía no se secó la tinta del último DNU y la UIA ya adelantó que “va a hacer falta dotar a las empresas de capital de trabajo para que retomen la actividad una vez que pase la pandemia”, lo cual “va a requerir un esfuerzo mayor del Estado (del Tesoro y el Banco Central)”. Invocando la “revalorización de lo público” y el “Estado fuerte” avanza el rescate al capital a cuenta de los trabajadores.

Nuestro planteo es otro: el Estado debe garantizar el pago integral de los salarios y actualizarlos automáticamente. Hay que abrir los libros de las empresas que argumenten no poder pagar a comisiones obreras, para analizar sus balances. La asistencia debe financiarse cortando de cuajo la sangría de la deuda externa y mediante un impuesto progresivo al gran capital.

La lucha efectiva contra la pandemia y sus consecuencias sociales requiere imponer la prohibición efectiva de despidos y suspensiones. Seguro universal de 30 mil pesos. Nacionalizar la banca y los recursos estratégicos y, sobre esa base, elaborar un plan de reorganización económica y social.

Miguel Bravetti

Los trabajadores del frigorífico Penta realizaron este miércoles una jornada de lucha en medio de un conflicto que ya arrastra más de un mes. Movilizados hacia Plaza de Mayo para hacer oír su reclamo contra la patronal de Ricardo Bruzzese -que mantiene un lock-out, adeuda salarios y persigue a los representantes gremiales-, los trabajadores debieron detener su marcha en el acceso al Puente Pueyrredón, pues se encontraron con un fuerte despliegue de Gendarmería que les obstruía el paso hacia la Ciudad de Buenos Aires. Durante horas mantuvieron un corte en el lugar, en una acción cuya repercusión llegó a todos los rincones del país.

Desde tempranas horas de la mañana, los trabajadores del frigorífico se concentraron en la plaza Alsina, en pleno centro del distrito de Avellaneda, donde se hizo presente el viceministro de Trabajo, Marcelo Bellotti, con el propósito de intentar persuadir a los trabajadores de desistir de la acción bajo el vago compromiso de conformar una mesa de diálogo “permanente”, cuya primer reunión sería el jueves en horas de la tarde en la delegación Quilmes del ministerio.

Contundente jornada de lucha de los trabajadores del frigorífico Penta

Este compromiso no solo llega demasiado tarde, luego de un mes de reclamos con represión de por medio, sino que implica dilatar aún más un conflicto donde la patronal se ha manejado a su gusto durante todas estas semanas. En la última reunión ante el Ministerio de Trabajo, la patronal rechazó los ofrecimientos del gobierno de darle acceso a los Repro y de una cuota de exportación que le garantizara la venta de la producción del frigorífico. Bruzzese manifestó que su decisión irrevocable es la de expulsar a los cuatro delegados electos y a otros 20 trabajadores.

El lock-out patronal se mantiene sobre la base de que Bruzzese deriva el trabajo a otros frigoríficos de su propiedad: toda una demostración de la discrecionalidad con la que las patronales se manejan en esta cuarentena.

Para todos los interlocutores queda más que claro que el conflicto no tiene ningún aside-



ro en el impacto de la pandemia en la economía. La actividad de Penta es por demás esencial, cuestión que le remarcaron los delegados y trabajadores a los funcionarios del gobierno; sin embargo, el gobierno no ha tomado ninguna medida para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores y la percepción de los salarios adeudados o el efectivo cumplimiento de la

conciliación obligatoria violentada por la empresa.

Los casi 250 trabajadores de Penta se movilizaron junto con la solidaridad de las organizaciones sindicales y de izquierda que acompañan el conflicto, entre las que se encuentra el Partido Obrero. Buscan una respuesta inmediata que resuelva de una vez este conflicto en medio de la pandemia y han tomado todos los re-

caudos necesarios para manifestarse sin poner en riesgo su salud.

Los trabajadores asistirán a la reunión planteada en el Ministerio de Trabajo para volver a reclamar por todas sus reivindicaciones. Esperan una resolución pronta y contundente del conflicto o seguirán las acciones.

La apertura de los libros de la empresa y el control de las demás plantas de Bruzzese se vuelven indispensables; así como el pago inmediato de salarios adeudados; el ingreso de todos los trabajadores, y el reconocimiento de los delegados y la garantía de libertad de organización sindical. La patronal no debe jugar con la vida de los obreros, ni hacer y deshacer a su antojo. De persistir esta negativa criminal a reabrir la planta planteamos la estatización del frigorífico y que se coloque bajo gestión de los trabajadores.

La situación que viven los trabajadores de Penta ha dejado en claro que la cuarentena no da descanso a los trabajadores y trabajadoras que en todo el país deben enfrentar el atropello de las patronales e incluso salir a luchar bajo estas difíciles condiciones.

Marcelo Mache



La clase obrera delibera y empieza a actuar

Todos con los obreros de Penta y con la juventud repartidora

NÉSTOR PITROLA

Una cifra empezó a encender las alarmas en el sistema de salud argentino: el 15% de los infectados forman parte del personal de salud. Es un 50% más alto que el promedio mundial.

Eduardo López, el infectólogo que integra el comité de expertos, dijo que el porcentaje “es un verdadero desastre” e identificó tres causas, muy argentinas ellas: que los médicos van de una clínica privada a una pública, donde las normas son muy distintas; la falta de los elementos necesarios para una protección adecuada y el sobretabajo de médicos que tienen dos empleos con el agotamiento inevitable por las jornadas extendidas (*Clarín*).

El cuadro descripto ha llevado a poner en primer plano, una vez más, la cuestión de los test masivos. El personal de salud de todo el país son unos 650.000 trabajadores. Los 170.000 reactivos recién llegados parecen muy lejos de estar en condiciones de atender al menos los test a todo el personal de salud de los grandes centros urbanos del país.

Al lado de esta realidad se ha producido el caso escandaloso del geriátrico cinco estrellas de avenida Los Incas. El caso siguió a otro, el Sierra Chica, Córdoba, de similares características; luego, otro en Avellaneda. Eugenio Semino ha reclamado control sobre los geriátricos que ocupan 150.000 camas en todo el país, pidiendo testeo de todo el personal sanitario que actúa en ellos.

Se informa que la ocupación de camas de terapia intensiva es baja. Cuando todavía el nivel de infectados es bajo. Pero no se informa cuál es el total de camas que dispone el país, cómo llegaremos a tener un nivel adecuado y qué pasará cuando haya camas libres en el sistema privado y esté abarrotado el hospital público.

Indudablemente, surgen dos cuestiones urgentes. La necesidad de centralizar todo el sistema de salud, privado, estatal y de obras sociales, incluyendo los geriátricos. Por otro lado, la necesidad de volcar recursos económicos masivos en él y reconvertir sectores de la industria en función de las demandas sanitarias.

Dinamitar la Anses ¿es la salida?

La llamada cuarentena administrada se extendería después del 26 de abril, pero al mismo tiempo se están ampliando las excepciones a paso agigantado, sea en las nuevas actividades agregadas, como por localidades y provincias que presionan sobre las grandes urbes y en especial sobre el sistema de transporte.

La última gran medida del gobierno, el decreto para financiar la mitad de los salarios por parte del Estado, ha reconocido el completo fracaso del paquete fantástico

de los 750.000 millones de pesos que nunca fue. Los presuntos créditos blandos no ocurrieron y los fondos liberados por los bancos fueron a parar a una nueva fuga de capitales, que ha llevado el dólar paralelo a las nubes, poniendo presión a una inflación que ya fue altísima en marzo, con un tercio del mes en cuarentena.

El decreto 376/20, a él nos referimos, asume hasta la mitad de los salarios de febrero para todas las empresas que se inscriban, sean o no esenciales, sea cual fuese su número de trabajadores o su condición económica. Es más, como en numerosas actividades, la burocracia sindical ha pactado suspensiones con rebajas de salarios, el subsidio puede ser un monto mayor a la mitad. Solo hace falta mencionar ante el Ministerio que a la empresa le cayó la facturación, cosa que ha ocurrido con el 98% de las empresas del país.

El subsidio, se calcula, podría llegar a 107.000 millones de pesos, aunque el gobierno no hace bien las cuentas, como lo demostró con la IFE, que insumirá el doble de lo previsto, porque se anotaron el triple de personas pronosticadas. Pero, además, las empresas están exentas de pagar el 95% de las contribuciones patronales a la Seguridad Social.

Toda esa plata saldrá de la Anses, al cual se lo dinamita: aportes al tacho y gasto masivo de su Fondo de Garantía y Sustentabilidad, previsto justamente para las crisis de los jubilados, no de las empresas capitalistas.

Alguien podrá decir, pero la plata va a la nómina de los salarios. Sí, pero se entrega a ciegas, sin examinar las cuentas de cada empresa. La Pyme más modesta tendrá el mismo subsidio que Pérez Compac, la Ford, Bulgheroni, Paolo Rocca, Grobocopatel o Toyota.

La cuestión de la apertura de cuentas y libros al examen de los trabajadores cobra cada día más vigencia. Para conocer la capacidad de pago de los salarios, para examinar los verdaderos costos de los formadores de precios, para detectar maniobras especulativas económicas y financieras y para gravar las tenencias extraordinarias ante la emergencia de la pandemia. Pero el secreto comercial y bancario manda en este régimen social.

La plata de la Anses es limitada. Este saqueo tendrá dos efectos, que le robarán aún más a los jubilados y que la asistencia del Estado a los salarios no será sustentable ante las previsibles prórrogas de la cuarentena.

La deuda o la vida

El gobierno sigue empeñado en evitar el default, para lo cual siguió pagando deuda hasta hoy y ha hecho concesiones enormes al capital financiero para llegar a un acuerdo con los bonistas. La propuesta de

reestructuración “modelo Stiglitz” efectivamente no ha tenido nada de nacional y popular: casi no hay quita de capital, se sostiene una tasa de repago del 2,3%, cuando las tasas internacionales están en cero y el plazo de gracia es de dos años y siete meses, porque en noviembre de 2022 se empiezan a pagar intereses.

Claro que eso no asegura la aceptación de los bonistas. Además, de aceptarse la propuesta, es solo un 20% de la deuda total argentina. La gracia debería extenderse a todos los organismos multilaterales, entre ellos el FMI y el Club de París, con el cual hay un vencimiento de 2.000 millones de dólares en pocas semanas. Por otro lado, la deuda en pesos hasta fin de año consumirá otros 700.000 millones de pesos de difícil refinanciación.

Al no pagar el vencimiento en dólares de hoy, 22 de abril, correrán treinta días de plazo de nerviosas negociaciones, donde el capital financiero intentará arrancar más concesiones aún, entre ellas un sendero de equilibrio y superávit fiscal que implica un ajuste descomunal. Las reestructuraciones de deuda y ajustes caen en cascada hacia las provincias.

El no pago de la deuda surge literalmente como una cuestión de vida o muerte para la Argentina, cuando pasamos de la recesión a la depresión en medio de la inflación y la bancarrota económica.

La frazada corta

En marzo, con solo diez días de cuarentena obligatoria, los ingresos fiscales crecieron a una tasa de 30%, mientras los gastos lo hicieron al 70%. El rojo primario llegó a los 125.000 millones de pesos. Se estima que la emisión monetaria podría llegar a 300 o 400 mil millones de pesos en abril, mayo y junio.

En las provincias, la cosa no está mejor. Todos sabemos que Chubut está quebrada, pero ahora el gobierno de Córdoba, una de las economías más poderosas del país, admite su propia quiebra. Entre las medidas a tomar anunciadas por Schiaretti se mencionaron el recorte de salarios y jubilaciones, el diferimiento de los aumentos a los jubilados y el pago con cuasimoneda de haberes. Entre las medidas que ya se tomaron está la emisión de bonos para proveedores, el no nombramiento de docentes suplentes, la eliminación de los planes de empleo (PPP, PIP, etc.) y el retraso en la asistencia social.

Por su lado, las patronales insisten en suspensiones con rebajas salariales, que se hicieron directamente masivas con los acuerdos del Smata, pasteleros, petroleros o el fallido acuerdo de la UOM, que sucumbió ante la rebelión de varias seccionales. Y no estamos hablando de rebajas nominales vía importes no remunerativos solamente, porque la inflación continúa a un ritmo del 40/50% anual y no hay a la vista actualización alguna.

Carlos Pagni, en dos líneas señaló, hace unos días con una buena cuota de cinismo, que la reforma laboral ha salido de la agenda, porque la garantiza el coronavirus. La frazada corta del régimen social cae sobre las espaldas de los trabajadores.

Existe una salida

El impuesto a las grandes fortunas hace más de diez días que es tema político de columnistas y economistas de todo orden, pero el poncho no aparece. El peronismo se ha empantanado y ya promete que “no afectará a las empresas”, después de que el banquero Heller tranquilizara a los Rocca y compañía, asegurando que “por perder el 2% de sus fortunas no serían menos ricos”.

El mismísimo Melconión aseguró que el impuesto sería “dos pesos con cincuenta”, mientras propone un “Coronabono”, de tipo nacional, que sería la nacionalización de las cuasimonedas provinciales. Claramente, este tipo de alternativas sobredevalúan la moneda y constituyen un mecanismo de rebaja de los ingresos reales.

El Frente de Izquierda ha presentado un proyecto profundo para gravar de manera progresiva a las grandes fortunas y rentas, afectando los paquetes accionarios, la ganancia bancaria, la propiedad terrateniente y las propiedades ociosas, capaz de recaudar 15.000 millones de dólares. O sea un impuesto que sea palanca, junto al no pago de la deuda, la nacionalización inmediata de hidrocarburos, el monopolio del comercio exterior y la nacionalización de la banca, de un plan económico y de una reorganización económica y social a partir de la intervención de los trabajadores.

El proyecto del FIT es una bandera para el debate y la intervención de la clase obrera.

Algo que ya empezó con la valiente movilización de los obreros de la carne, de Penta, que marcharon a la Plaza de Mayo, con el paro internacional de la juventud repartidora, con las asambleas y movimientos del personal de salud que se organiza, con el plenario de organizaciones sindicales de Ensenada, con la resistencia del Sutna a las rebajas salariales, pasando por encima de la formidable entrega de la burocracia sindical de la CGT y las centrales cooptadas por el gobierno y la patronal.

Los comités obreros electos por los trabajadores, los mandatos a los cuerpos de delegados para actuar, están en el orden del día. Defensa integral del salario, ningún despido, control obrero de la esencialidad y de las condiciones sanitarias donde la actividad sea imprescindible a las necesidades sociales, apertura de cuentas.

Cada hora que pasa, hace más necesaria la intervención de los trabajadores en la crisis.

El Covid-19 y el Hospital Zubizarreta

El rol vergonzoso de Sutecba

El contagio de la jefa de Terapia Intensiva del Hospital Zubizarreta y el cierre del servicio ante 15 aislamientos generaron una gran conmoción. Es que en estos últimos días tomaron estado público muchísimos casos de contagio entre profesionales y trabajadores de la salud. Ya suman 374 en todo el país, según los registros oficiales, lo que significa un 14% del total de personas confirmadas en tests de Covid-19.

En los crecientes reclamos de trabajadores se describe un mismo panorama: falta y deficiencia de elementos de protección personal, tests a cuentagotas, multitrabajo y largas jornadas que exponen al contagio, bajos salarios, ausencia de protocolos que cuiden adecuadamente a todo el personal. La desidia gubernamental y la precarización laboral son las principales causas de exposición al virus entre trabajadores de la salud.

El rol nefasto de Sutecba

En un audio que giró por whatsapp, un delegado gremial de Sutecba (sindicato de los trabajadores del gobierno de la Ciudad) carga todas las tintas en la médica contagiada. "Esta doctora se creía Dios", dice, refiriéndose a que no se cuidaba. En cuanto al resto del personal expuesto, solo llama a tomar conciencia y cuidarse. Estas declaraciones no llamarían la atención si no vinieran de un delegado de un gremio que tiene que velar por el interés colectivo de los trabajadores municipales.

La velocidad con que el gremio conducido por Amadeo Genta denuncia al propio personal infectado tiene de contracara el silencio sobre las precarias condiciones de trabajo que exponen al contagio en los hospitales municipales. El colmo de este contraste estuvo en el Hospital Elizalde, donde la delegación de Sutecba

hizo ingresar a la policía al establecimiento para impedir una asamblea por... elementos de protección!

El pez se pudre por la cabeza

Desde ya que es posible que trabajadores incurran en el descuido. Pero ¿son indistintas las condiciones en que desenvuelven su tarea? En el Zubizarreta no hay un protocolo que especifique las condiciones de acceso, permanencia, circulación y egreso de sus instalaciones. Ni se controla la fiebre en la entrada. En sectores abocados a la atención del Covid-19, el material de protección es incompleto o insuficiente. En otros casos es defectuoso o inexistente. Una mayoría expresa no haber tenido la capacitación adecuada.

Alguien puede descuidarse, pero ¿qué pasa con el resto si el que descuida es el propio gobierno? En un caso, las consecuencias son, en general, aisladas; en el otro provocan decenas de contagios y servicios que dejan de funcionar. Poner la carga en el descuido individual y callar sobre el descuido estatal es una canallada. Refleja a un gremio vendido al gobierno de turno, que cuida a los responsables de la precarización laboral y mantiene silencio sobre sus víctimas, cuando no directamente las ataca.

Por una salida propia

Vamos por tests masivos para todo el personal; elementos de protección personal completos, de calidad y sin retaceos; jornadas de seis horas y un aumento salarial de 20 mil pesos; protocolos de bioseguridad controlados por los trabajadores, por hospital y por servicio. Desde Tribuna Municipal levantamos estas reivindicaciones y apostamos a conformar comisiones de seguridad e higiene para desarrollarlas.

Gustavo Cala

Un freno a la entrega de UOM

La presión desde abajo traba suspensiones y recortes salariales

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, anunció en los medios, hacia fines de la semana pasada, la concreción de un acuerdo de la dirección de la UOM y las cámaras patronales de la industria metalúrgica consistente en las suspensiones de trabajadores con salarios recortados en un 30%, que alcanzaría a 200 mil metalúrgicos. Este paso era la generalización para todas las metalúrgicas del país, de lo acordado previamente entre el sindicato y las patronales de Techint y Aluar de suspender personal con la misma rebaja salarial. Solo en Techint (Ternium-Siderar) esto afecta a 5 mil trabajadores.

Las suspensiones y rebaja salarial de todas las metalúrgicas que las patronales pretenden extender por seis meses, en parte complementaría el acuerdo que el Smata firmó con las automotrices, consistente en suspensiones con recorte salarial del 35%, ya que importantes autopartista encuadradas bajo convenio metalúrgico son verdaderas tercerizadas de Toyota, Ford, General Motors, Volkswagen y Mercedes Benz.

Un rechazo masivo de los metalúrgicos

El anuncio de Caló en los medios recorrió las fábricas metalúrgicas, generando una fuerte indignación y rechazo entre los metalúrgicos, incluidos delegados de fábrica afines a la conducción, lo que hizo tambalear el acuerdo hasta voltearlo, por el momento. La supuesta negativa al acuerdo por parte de un sector de la directiva nacional de la UOM fue, en realidad, un reflejo de supervivencia ante la evidencia de una posible rebelión en la base y en sus propias agrupaciones, que se lleve puesto a más de uno.

El rechazo generalizado a esta nueva tentativa de entrega de la burocracia metalúrgica viene luego de años de bastardear el salario, llevándolo a niveles de pobreza y dejando pasar



cierres de fábricas y despidos masivos. Los recortes a los salarios metalúrgicos desde que comenzó la cuarentena ya afectaron a miles de trabajadores, con quitas de premios y presentismo, que la burocracia miró desde el "aislamiento autoimpuesto". También estuvieron borradas las seccionales frente a reclamos de medidas de higiene que las patronales incumplieron sistemáticamente. El edulcorante de Caló y compañía para hacer pasar las suspensiones al 70% era un compromiso de las patronales a no despedir durante cuatro meses. Las mismas que vienen eludiendo el decreto de prohibición de despidos y suspensiones de Alberto Fernández, como Techint que despidió a 1.450 trabajadores (con el aval del gobierno). Dicho decreto, que hemos denunciado desde estas páginas, por su carácter limitado y tardío, permite las suspensiones siempre y cuando haya acuerdo entre empleados y empleadores, es decir, entre los Paolo Rocca y la burocracia patronal de la UOM que lo arregla sin ningún mandato de los trabajadores. El decreto presiden-

cial es preciso en los detalles para favorecer a las patronales.

Por otra parte, las suspensiones son la acción que anticipan despidos, porque las patronales continúan la producción con menos personal. Es decir, que no hay garantía de evitar despidos, más bien, es el paso en ese sentido.

El plan B

Caído el acuerdo general de suspensiones, la UOM anunció que la próxima liquidación a realizarse en estos días debe ser del 100% del salario y, si las empresas no cumplen, se realizarán las denuncias correspondientes. Así las cosas, la cúpula de la UOM intenta desactivar un cuadro de estallido en la base del gremio, llevando a que los trabajadores de cada fábrica tengan que arreglárselas por su cuenta. Es una orientación de aislamiento y atomización del movimiento obrero metalúrgico para hacer pasar un ataque generalizado de las patronales metalúrgicas. Sin embargo, aún no hay que descartar que retomen la iniciativa de un acuerdo general.

Emiliano Bonfiglio

Los reclamos de los residentes bonaerenses

Se reunió la asamblea de delegados

La asamblea de delegados residentes se reunió en un momento crítico para los trabajadores de la salud. Mientras el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, afirma que los hospitales están "totalmente abastecidos" ante la pandemia, la realidad es que para protegernos tenemos que hacer vaquitas y recibir donaciones.

En la asamblea, que se llevó a cabo el viernes 17, quedó retratada esta desprotección estatal por el hecho de que en la mayoría de los centros de salud el único elemento de bioseguridad es un barbijo de friselina por semana. Estas condiciones laborales son las que llevan a que nuestro país tenga la tasa de trabajadores sanitarios contagiados de coronavirus más alta del mundo.

Por eso, se resolvió que los residentes no vamos a trabajar si no están garantizados los elementos de protección personal, ya que eso pone en riesgo nuestra salud, la de nuestras familias y la de los propios pacientes. Se votó reclamar que se garantice el testeo y seguimiento de todo el personal que haya estado en contacto estrecho con algún caso confirmado de Covid-19, aunque permanezca asintomático, un aumento de emergencia del presupuesto de salud, la reapertura de paritarias para discutir nuestras condiciones laborales, exigir el pase a planta de todos los trabajadores y la apertura de cargos para cubrir las faltantes de personal sanitario.

La situación salarial también es crítica. El gobierno nacional anunció, primero, que pagaría un bono de 30.000 pesos, luego lo redujo a 20.000 a cobrar en cuatro cuotas y,

por lo pronto, no lo cobró nadie. El gobierno de Kicillof ofreció en la paritaria un aumento de entre el 12 y el 14%, dependiendo de la categoría, una verdadera provocación, cuando cobramos un promedio de 40.000 pesos, mientras tenemos suspendidas las licencias ordinarias y hasta el derecho a renunciar. El reclamo por la reapertura de paritarias para poner todos estos elementos sobre la mesa es fundamental y un contraste con el silencio de la burocracia de los sindicatos, como Salud Pública y con el tímido rechazo de Cicop a la

oferta del gobierno.

Otro aspecto a destacar de la votación es el planteo de que "para enfrentar esta pandemia es indispensable la unificación del sistema de salud, con centralización estatal de todos los recursos, para garantizar un acceso verdadero y permanente universal". Esto, partiendo de denunciar que apenas la cuarta parte de los establecimientos con capacidad de internación corresponde al sistema estatal.

Ante la desidia del gobierno, en cada centro de salud crece la organización de los trabajadores: en forma

de reuniones por servicio, delegados por sector, cartas a la dirección, incluso piquetes, como es el caso del Hospital Belgrano de San Martín ante la proliferación de contagios entre el personal. Ese es el camino que tenemos que profundizar para reclamar con fuerza colectiva contra la política temeraria del gobierno, que pretende hacernos trabajar sin protección; para imponer protocolos propios en cada centro de salud y conquistar un aumento salarial, ni bono en cuotas ni premio consuelo.

Corresponsal

Pedido de informes ante el contagio del personal de salud

Lo presentó Romina Del Plá

Desde la banca del Frente de Izquierda, Romina Del Plá -acompañada por Nicolás del Caño- presentó un pedido de informes, exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Salud una explicación sobre la situación de los trabajadores de la salud en relación con las denuncias de propagación del Covid-19, así como la falta de insumos y medidas de higiene y protección necesarias en diversos establecimientos.

La situación que vive el personal sanitario adquirió una gravedad inusitada, que representa una amenaza sanitaria de primer nivel en medio de la lucha contra la pandemia. Las consecuencias

de la falta de recursos están mostrando su faceta más dramática: a fines de la semana pasada, el Ministerio de Salud publicó la cifra oficial de trabajadores de la salud infectados, que ascendía a 374 y tres fallecidos. Representa el 14% de los 2.669 casos confirmados hasta ese momento y se trata de la tasa de infección más alta del mundo, superando a España con el 13%.

Es evidente que no se destinó el presupuesto suficiente y la situación de colapso ya se empieza a ver cuando aún estamos lejos de llegar al "pico" de la pandemia. Su impacto es enorme no sólo porque afecta a una parte sustancial de los planteles de sa-

lud, sino porque está generando el cierre de servicios y hasta de centros prácticamente enteros.

Es una necesidad cada vez más apremiante avanzar en una centralización real del sistema de salud, que involucre en un plan común al sector público, privado, de las universidades nacionales y de las obras sociales, coordinado por el ministerio y bajo control de trabajadores y profesionales del sector, así como disponer un aumento presupuestario extraordinario para equipar seriamente al sistema de salud y a sus trabajadores en el combate a la pandemia.

Corresponsal (Equipo legislativo del PO-FIT)

Trabajadores de la salud realizarán un plenario nacional

Impulsado por Tribuna de Salud y la Coordinadora Sindical Clasista

Este jueves 23, a las 18:30hs, se llevará a cabo un plenario nacional de trabajadores impulsado por Tribuna de Salud y la Coordinadora Sindical Clasista (CSC), vía la aplicación JitSi.

La situación de los trabajadores de la salud ha saltado a la primera plana nacional. La falta de elementos de protección personal que vienen denunciando para poder atender la pandemia en condiciones de seguridad se tradujo en contagios que vemos todos los días en las noticias. Argentina, que todavía no se encuentra registrando un pico de la pandemia y su sistema

de salud no se encuentra saturado, tiene uno de los mayores índices de trabajadores de la salud contagiados con Covid-19.

El caso de un enfermero de Brandsen, muerto por coronavirus cuando presentaba una condición de riesgo y debía estar licenciado, los contagios de trabajadores que llevan el virus de un trabajo a otro por el pluriempleo, la falta de protocolos por desidia o voracidad patronal, quedaron expuestos al conjunto de la población. En este cuadro, el avance de la organización de los trabajadores

para defender su vida, la de su familia y una atención adecuada para el conjunto de la población se ha vuelto crucial. Los sindicatos están alineados a los gobiernos y pretenden que los trabajadores de la salud se comporten como soldados cuando son solo trabajadores precarizados que se están exponiendo a un virus mortal.

En las clínicas privadas, las patronales exponen a los trabajadores sin ningún tipo de control por parte del Estado y la burocracia de Héctor Daer se comporta como un empresario más de la salud privada. En los hos-

pitales y centros públicos, la realidad no es muy diferente. Frente a esto, el plenario se propone impulsar un movimiento para la centralización de todo el sistema de salud bajo la órbita nacional.

La pelea por triplicar el presupuesto para contratar más personal, aumentos de salarios para terminar con el pluriempleo, equipos de protección, tests y poner en pie los hospitales que sean necesarios para atender la pandemia, así como promover en todos los lugares la organización de los trabajadores a través de

Jueves 23 de abr. | 18:30hs

Plenario nacional de trabajadores de la salud

Con la participación de trabajadores de la salud pública y privada de todo el país y de legisladores del FIT U - PO

CONECTATE VÍA LINK 

comités de seguridad e higiene para controlar el cumplimiento de protocolos y la provisión de EPP (equipo de protección personal). La realización del plenario será un paso adelante en ese sentido y reforzará las luchas

incipientes que se están dando, tanto en el ámbito público como privado. Invitamos a todos los trabajadores a sumarse a esta tarea.

Facundo Lahitte

Nace el "Observatorio de los trabajadores" con un mapa interactivo

La situación de los trabajadores en la pandemia. Seguílo en PrensaObrera.com

A través de informes periódicos daremos publicidad a las denuncias e investigaciones que recibimos a través de las agrupaciones u organizaciones de trabajadores, de nuestros legisladores y todas aquellas que nos llegan directamente y que dan cuenta de los atropellos y ataques a las condiciones de vida, de salud y de trabajo de millones de obreros y empleados del país, en el marco de la pandemia y por la presión de las patronales (e incluso del propio Estado) de trasladar las consecuencias de la crisis sobre los

trabajadores. Asimismo, dar cuenta de las violaciones a la cuarentena por parte de los capitalistas en la reanudación de las actividades que se realizan con nulas o deficientes medidas de cuidado de la salud de los obreros y empleados, y de todos los que los rodean, salvo donde los trabajadores han logrado imponerle condiciones de seguridad a las patronales.

Para ordenar, el informe se dividirá entre las denuncias que atañen a las actividades que están en manos de los distintos gobiernos



OBSERVATORIO de los trabajadores

MAPA INTERACTIVO

despidos - rebajas salariales
suspensiones - seguridad e higiene

y las del sector privado. A su vez, este último segmento los dividiremos entre las actividades "autorizadas" y las que están quebrando incluso las crecientemente escasas disposiciones de prohibición de tareas.

El Observatorio, además de los informes periódicos de resumen, contará con un mapa interactivo que se actualizará diariamente y que permitirá tener una radiografía actualizada de la situación real de los trabajadores en nuestro país.

El paro internacional de trabajadores de apps, un gran paso adelante

El paro internacional de repartidores de apps de este 22 de abril -precedido por un "twittazo"- es un enorme paso adelante. El paro arrancó primero en España y, más tarde, siguió con concentraciones en Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Perú y Argentina. Allí, voceros pusieron el cuerpo para recibir a los medios y manifestar los reclamos.

El caso de Ecuador merece un reconocimiento especial. Los compañeros venían de un paro el pasado 17 y estaban en plena negociación con Glovo. La patronal había pedido una tregua, pero cinco días después Quito fue escenario de una caravana ejemplar y una concentración, que fue dispersada por las fuerzas represivas del gobierno de Lenín Moreno.

A pesar de la complejidad que plantea la modalidad de trabajo a destajo en estas aplicaciones, de las



presiones de las empresas y del boicot de los sindicatos, el cese de la actividad se fue sintiendo con el correr de las horas. En los horarios donde más concentración de delivery suelen haber, se registró muy poco movimiento.

En Argentina, el paro fue más fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata y Neuquén. En el Obelisco, una delegación de 25 compañeros plantó la ya icónica pirámide de mochilas con carteles y ofrecieron una concurrencia

de prensa a los principales medios del país.

La iniciativa fue convocada por la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) y Glovers Unidos Argentina, y la adhesión que fue ganando descolocó a las burocracias sindicales que operan entre los repartidores. ASIMM, en la Ciudad de Buenos Aires, se despegó de la medida y hasta la boicoteó, negándose a llamar a los trabajadores de planta de PedidosYa a sumarse al paro, y mucho menos al gremio de mensajeros en su conjunto. A su turno, APP, un sindicato alineado con el gobierno, declaró que "apoyaría cualquier medida por más aislada que sea", pero no movieron un dedo por adherir al paro ni expresar los reclamos de los trabajadores con la misma. Acric, en La Plata, publicó

un comunicado pronunciándose en contra del paro, argumentando que era impropio en el cuadro de pandemia, lo que es una impostura porque da la espalda al reclamo por las condiciones sanitarias de los propios trabajadores que dicen representar.

Las próximas asambleas prometen ser masivas, para debatir un balance y un plan de acción para seguir plantándonos contra las patronales. Habrá que ver si las empresas, luego de la medida coordinada en varios países, ceden a algunos de los reclamos. La clave es seguir organizando al movimiento de repartidores, que dio con esta acción un paso descomunal.

Juan V. (Agrupación de Trabajadores de Reparto)

MUJER ■

El Ministerio de la Mujer, de espaldas a los reclamos de las mujeres

La ministra de la Mujer, géneros y diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, fue entrevistada para que se explique frente a los 34 femicidios registrados en marzo y que motivaron un ruidazo nacional desde los balcones por #NiUnaMenos.

La ministra comenzó negando el agravamiento de la situación bajo la pandemia, defendió cerradamente lo hecho y dijo que la cifra de femicidios es "altamente estable", comparando con los 33 casos de marzo de 2019. Esto, mientras las denuncias aumentaron en un 39% a nivel país según los informes oficiales, porque las situaciones de encierro acicatean la violencia intrafamiliar, que es el ámbito donde ocurren mayormente los femicidios.

La posición muestra un ministerio de espaldas a las mujeres, mientras son los familiares los que buscan a sus desaparecidas frente a la inacción de todos los estamentos del Estado.

"En otros años no hubo plan": en 2020, tampoco

Consultada sobre las respuestas que están dando a las violencias contra las mujeres, Gómez Alcorta repite "llamar al 911, acompañamiento de la Línea 144, apoyo de las redes territoriales, coordinar con la Banca de la Mujer del Senado, con los municipios". Exactamente el mismo contenido del Plan Nacional contra las Violencias de Género de la funcionaria macrista Fabiana Túnez.

Todo un dispositivo precarizado. Es la situación de las trabajadoras que atienden la Línea 144, que segui-

rán teniendo turnos agobiantes en la medida en que funcionan como el salvoconducto de la ausencia general de respuestas del Estado.

La novedad que aporta la ministra en su abordaje "multiagencial" -que antes se llamaba interdisciplinario- supondría el cambio de paradigma de enfocarse en "trabajar en la exclusión del violento y no en el refugio de las mujeres víctimas".

Una posición dolosamente superficial que no se ajusta a la dinámica real de la violencia de género y que apunta ahorrarle presupuesto al Estado, confinando la problemática a los mecanismos policiales y penales, que son los que fallan sistemáticamente, porque ellos mismos son garantes de la reproducción del "Estado opresor", como bien cantaron las chilenas.

Lo cierto es que no existen refugios ni para las víctimas ni para los violentos.

No hay refugios

La realidad marca que frente a una situación de peligro y ante el calvario burocrático que supone denunciar violencia de género y conseguir una exclusión y/o una perimetral, las mujeres terminan huyendo, solas o con sus hijxs, en busca de un lugar donde refugiarse del violento. El hecho de que vayan a parar mayormente a las casas de amigas o familiares no responde a una predilección por "la contención", las mujeres y su prole simplemente van donde pueden y es el Estado el que orienta ese derrotero descargando el problema en particulares.

Según informa la ministra, en el país hay entre 120 y 125 refugios y "la inmensa mayoría son municipales, algunos son provinciales, algunos de la sociedad civil y de organizaciones religiosas"; es decir que lejos de existir una "red nacional de derivaciones", hay un número superpuesto de inmuebles, gestionados con presupuestos disímiles y organizados con fines y métodos propios, incluidos los correspondientes al claustro religioso.

Con graves problemas de infraestructura, limitaciones para estar con hijxs, con personal escaso y precarizado, que favorece la descentralización, las mujeres víctimas no encuentran allí un lugar seguro. Esta situación no se resuelve pateando la pelota afuera, como hace Gómez Alcorta.

Más allá de los refugios

Para excluir a los violentos se requiere mejorar la situación económica de las mujeres. La carencia general de trabajo y de vivienda popular es la base material de las revinculaciones, sin transformar la realidad que hace de la familia una institución de sustento, las mujeres quedan aprisionadas en relaciones violentas. El gobierno, mientras tanto, le ha denegado 10 mil pesos a miles de trabajadoras domésticas.

El plan de no gastar presupuesto y de culpabilizar a la sociedad sobre una realidad que es forjada desde un Estado de clase, incluida por supuesto la cultura que desde allí se imparte, no aporta nada nuevo a la dramática situación de la violencia contra las

mujeres. Al poner el peso de las medidas en la exclusión, la ministra se contradice con el abordaje "multiagencial" del que se jacta.

El femicidio como último eslabón de la cadena de violencia tiene un recorrido que no se aborda correctamente con un punitivismo ramplón ni se soluciona con "3.229 planes Hacemos Futuro para la población travesti trans y otros 300 para mujeres en situación de violencia", ingresos que rondan la línea de indignidad.

Control popular de las mujeres durante la cuarentena

En la entrevista se pregunta por las medidas para cuidar a las mujeres de las organizaciones sociales que están en la primera línea de lucha contra la otra cara de la pandemia en miles y miles de comedores y copas de leche en nuestro país. Gómez Alcorta responde con un discurso oficial, sin dar cuenta de que el Estado no está cumpliendo con la demanda de comida, retrasa el pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y que las extranjeras están siendo violentamente discriminadas, con 2, 10 ó 38 años viviendo en el país.

El tema desatendido sí le sirve para decir que "las políticas de largo plazo chocan con las urgencias", apelando a las falsas oposiciones economía-salud-derechos mujeres, cuando está claro que todo ello podría atenderse de una mejor manera si el gobierno afectara el pago de la deuda y reorganizara la industria y la economía del país en beneficio de las mayorías.

Comité de crisis o Consejo autónomo

Sectores feministas le recriminan a Gómez Alcorta que su ministerio no esté integrado al Comité de crisis por el Covid-19 y atribuyen esa exclusión a la falta de integración de las políticas de género a las medidas más generales por la pandemia, cuando en el centro de la escena aparecen el hogar y las tareas de cuidado, un lugar y un trabajo asignado mayormente a las mujeres.

Más allá de la respuesta paradójica de la ministra (lo "coordino con Santiago Cafiero"), debemos advertir que estamos ante el enésimo intento de resolver la cuestión de la mujer reforzando la estatización de sus demandas. Pero "el Estado no baja políticas concretas" porque tiene un carácter de clase y subsume toda política a esta orientación general. El ministerio de la mujer sirve más como pantalla para ocultar la falta de políticas del gobierno.

Reforzamos nuestro planteo de que para que las mujeres tengan autonomía debemos poner en pie un organismo con poder autónomo, organizado por la masa de las mujeres de nuestro país, que vote un programa y luche por su implementación. Planteamos la puesta en pie de un Consejo Autónomo de la Mujer que arranque los recursos para las mujeres contra la orientación ajustadora del Estado capitalista.

Carla Deiana

Versión completa en

<https://prensaobrera.com/mujer/69190>

La crisis capitalista se ahoga en petróleo

Por primera vez en la historia se ha vendido el barril de petróleo a una tasa negativa en el mercado de Nueva York. En lugar de ganar, se tuvo que pagar para que compren.

Se debe a la sobreproducción petrolera mundial, a la caída del consumo de energía -potenciado por recesión y las cuarentenas pandémicas- y a un enorme espiral especulativo.

Sobreproducción y...

Existe sobreproducción mundial de petróleo. No es el coronavirus el que la ha provocado. Sí la ha potenciado. Se producía más petróleo que el que se consumía, producto del ingreso a una nueva fase recesiva. La Agencia Internacional de la Energía pronosticó que la oferta petrolera mundial iba a superar este año en más de 900 mil mbd (unidad de medida: millón de barriles diarios) a la demanda.

Hace tiempo se creó un organismo (Opep) que nuclea a Estados productores de petróleo para regular la producción y envío de hidrocarburos al mercado, a fin de que no caigan en demasía los precios por sobreoferta. Esta autorregulación significa que se podría producir más petróleo aún y no se lo hace para que no se depriman los precios. La Opep no integra a todos los países productores de petróleo. Esta comandada por Arabia Saudita y los países árabes, Venezuela, Irán, etc. Fuera de la Opep se encuentran principalmente Estados Unidos y Rusia. Esta última, sin embargo, ha venido estableciendo acuerdos con la Opep de autorregulación, que vencieron el 1° de abril. Arabia Saudita planteó una nueva reducción de 1,5 mbd. Y adelantó -ante el inicio de la pandemia- que seguramente se plantearían nuevas reducciones. Rusia se opuso. Espe-

raba que un retroceso en el precio del petróleo vendido fuera compensado con el mantenimiento o aumento de la cantidad exportada. Esto provocó la réplica de Arabia Saudita, que anunció el envío al mercado de 2,5 mbd más. La ruptura de acuerdos y el aumento de la oferta provocó el desplome del precio del petróleo.

...Guerras 'comerciales'

¿Por qué se opuso Putin al acuerdo de restricción de producción de la Opep?

El gobierno ruso acusa que los barriles que Rusia se abstiene de colocar en el mercado son vendidos por empresas yanquis, que no se disciplinan a las limitaciones votadas. Lo cual impide que la autolimitación de la Opep desemboque en un aumento de precios.

Trump apoya las limitaciones a la producción de la Opep... para Rusia. Porque las exportaciones de hidrocarburos rusos suman un 40% de sus ingresos nacionales y un retroceso pondría en mayores aprietos al gobierno de Putin. Rusia viene siendo acosada por sanciones económicas yanquis, para obligarla a que 'devuelva' Crimea y retroceda en Ucrania, en Medio Oriente, y abra su economía a una mayor penetración al capital internacional.

En un primer momento, Trump alentó al príncipe saudita para avanzar en estos planes. Pero el fuerte desplome de precios significó un tiro por la culata.



Es que como subproducto de la crisis de 2008, Estados Unidos se lanzó a un amplio plan de producción de hidrocarburos. Grupos capitalistas tomaron créditos baratos y los invirtieron en pozos de fracking, cuyo costo de producción es más alto que los tradicionales. Para que sea rentable el fracking, el precio del barril debe estar por encima de 45 dólares. Así, en el lapso de una década, Estados Unidos consiguió el autoabastecimiento y un récord de producción nacional, pasando a convertirse en exportador. Desde 2017, Rusia solo aumentó su producción petrolera en un 16,3%, mientras que Estados Unidos lo hizo en un 87%.

La caída del petróleo lleva a la quiebra a un amplio sector de la industria yanqui.

Por el lado ruso han habido críticas de potentados del petróleo, considerando -de hecho- la política de Putin como aventurera. Leo-

nid Fedun, uno de los capitalistas de la petrolera rusa Lukoil, estimó que la negativa de Rusia le podría costar al país entre 100 y 150 millones de dólares al día por el posible desplome de precios hasta los 40 dólares por barril. Se quedó corto: el petróleo europeo Brent cayó a 25 dólares y el del yanqui WTI batió el récord con tasas negativas este lunes.

La movida de Putin pretendía bancar un pequeño retroceso en el precio, para llevar a la quiebra a empresas de fracking norteamericanas, eliminar así la sobreproducción y forzar a Trump a negociar. Pero el desplome obligó a todas las partes a reconsiderar la situación. Una nueva reunión de la Opep+ (o sea, la Opep y Rusia) (12/4) concluyó con un acuerdo forzado: la producción se reduce en 10 mbd desde el 1° de mayo y va retrocediendo (8 mbd, el 1° julio).

Pero la sobreproducción continúa, incluso con esta fuerte reducción productiva. Ahora sí, acentuada por la parálisis económica impuesta por la cuarentena pandémica.

Esto se trasladará en fuertes crisis políticas y sociales. Ni qué hablar de Venezuela e Irán, que hace años tienen bloqueadas sus exportaciones petroleras y la capitalización de sus empresas. Y la crisis que provoca en los ingresos de Irak, que depende en un 90% de estas exportaciones.

Especulación financiera, quiebras, guerras y revoluciones

A este panorama se suma la especulación financiera que domina a las bolsas mundiales. El lunes se desplomó no el precio contado del petróleo, sino el de los contratos a futuro. Como todo bajo el capitalismo, potenciado en tiempos de crisis, existe un gran movimiento especulativo. Tenedores de esos contratos se desligaron apresuradamente de los mismos porque están a días de tener que pagarlos y recibir el petróleo. En condiciones donde no lo pueden almacenar para esperar su eventual valorización. Porque los depósitos están repletos.

La salida de la cuarentena atenuará un poco esta crisis de sobreproducción, pero no la resolverá. Se plantea, con mucha más fuerza que en 2008, la necesidad de la quiebra de una parte importante del capital. No solo de pequeñas empresas, sino grandes monopolios (las acciones de British Petroleum perdieron un 50% de su valor, etc.). Esto no podrá ser resuelto 'económicamente', sino a través de acciones políticas y militares.

Rafael Santos

La Conferencia Latinoamericana convocada por el FIT-U se posterga

La Conferencia Latinoamericana, convocada por los partidos integrantes del Frente de Izquierda-Unidad, para los días 1, 2, 3 y 4 de mayo del corriente año, ha sido postergada en fecha a definir. El desembarco de la pandemia del coronavirus en nuestro continente hace imposible -por el cierre de fronteras, las medidas de cuarentena, etc.- la realización de la conferencia en la fecha prevista.

Queremos dejar en claro que se trata solo de una suspensión temporal hasta que las condiciones nos permitan realizarla. Es que la iniciativa del FIT-U, a la luz de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus y la agudización cualitativa de la crisis capitalista y sus consecuencias sociales devastadoras para las y los trabajadores y los sectores populares, ha adquiri-

do una mayor importancia aún.

En el marco de una profunda desigualdad social, una pobreza creciente y los sistemas de salud pública deteriorados por décadas de recortes, todos los gobiernos latinoamericanos, desde los más derechistas hasta los autodenominados "nacionales y populares", con sus matices, han actuado en defensa de los intereses capitalistas en detrimento de la preservación de la salud y la vida de los sectores populares. El imperialismo yanqui, por su parte, a pesar de que Estados Unidos ha pasado a ser el epicentro de la crisis sanitaria mundial, se ha valido de la pandemia para relanzar una nueva cruzada criminal contra los pueblos de Venezuela y de Cuba.

La burguesía, la mayor parte de ella golpeada por el parate económico forzoso, descarga su crisis sobre

las espaldas del pueblo trabajador y aprovecha la conmoción social para avanzar de hecho con reducciones salariales, despidos, reformas laborales y previsionales. A su vez, se acrecientan las crisis políticas y los gobiernos fortalecen los aparatos represivos, previendo nuevos levantamientos de las masas, en lugar de invertir todos los recursos en favor de un mayor equipamiento sanitario.

Como consecuencia de todo esto, las enormes contradicciones sociales que motivaron las grandes rebeliones populares de 2019, lejos de haberse apaciguado, se han agudizado. Ya estamos viendo muestras en nuestro continente y en el mundo de resistencia de sectores de la clase trabajadora contra la ofensiva patronal. Nuestro Frente de Izquierda-Unidad publicó ya hace un mes una declaración con un programa y



una orientación para que esta histórica crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.

Este escenario refuerza la necesidad de concretar la conferencia cuando estén dadas las condiciones para impulsar la lucha de las masas obreras y campesinas contra las consecuencias devastadoras de la crisis capitalista y el coronavirus. Más que nunca, la tarea estratégica

es la lucha por gobiernos de trabajadores y la Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.

La realización de la Conferencia Latinoamericana, a su turno, será un instrumento fundamental para impulsar esta perspectiva.

**Frente de Izquierda Unidad
(Partido Obrero - PTS - Izquierda Socialista - MST)**

China, presente y futuro en medio de la pandemia

China ha logrado contener la pandemia. Un escenario distintivo respecto del que atraviesan las grandes economías occidentales, empezando por Estados Unidos, que ha pasado a convertirse en el epicentro de la enfermedad.

Hay quienes señalan el ocultamiento que ha hecho el régimen chino de la información al originarse el brote, lo cual ha contribuido a su propagación en su etapa inicial. Las autoridades locales de Wuhan fueron acusadas de persecuciones contra médicos que advirtieron tempranamente (desde fines de diciembre) sobre la peligrosidad de la enfermedad, entre ellas la directora del Hospital Central y Li Wenliang, un médico que fue obligado a retractarse de sus advertencias y que falleció más tarde a causa del virus. Todo esto generó una crisis en el aparato burocrático. El diario *Global Times*, ligado al Partido Comunista Chino, rompió el hermetismo del régimen en un editorial donde se refirió a una “negligencia local y nacional ante el brote nacional” (30/1).

Pero, asimismo, existe una coincidencia en destacar la eficacia del gigante asiático para controlar la plaga una vez que la misma se fue expandiendo.

Una visión compartida es que el éxito tiene que ver con la fuerte regulación y la centralización establecidas por el Estado para pilotear la crisis, lo que permitió disponer, planificar y asignar adecuadamente los recursos existentes, en función de las necesidades y prioridades. Esto contrasta con la anarquía reinante en la mayoría de grandes economías capitalistas, con la excepción de Alemania. El rol dirigente jugado por el Estado expresa, a su modo, aunque sea en forma lejana, desfigurada y desnaturalizada, los resabios del pasado revolucionario chino. La feroz dictadura del Partido Comunista chino ha viabilizado la restauración capitalista, pero la misma está inconclusa. El desmantelamiento del Estado, que aún ejerce una fuerte tutela en la vida económica y social, sigue siendo una asignatura pendiente. China no ha logrado ser desguazada hasta el momento, como ocurrió con Yugoslavia, pese a que China era un terreno propicio si nos atenemos a sus enormes dimensiones territoriales.

Un verdadero Estado obrero, basado en la democracia de los trabajadores, se habría valido de los resortes del Estado para enfrentar la pandemia, pero apelando, al mismo tiempo, a la intervención e iniciativa creativa del pueblo, cuestión



que es incompatible con la regimentación que ejerce la burocracia restauracionista.

Contradicciones económicas

La evolución favorable en lo que se refiere a la crisis sanitaria ha abierto una cuota de alivio, aunque no está exenta de la amenaza de nuevos picos de infección, pero eso no puede hacer perder de vista los fuertes nubarrones que acechan el país. La pandemia ha agudizado todas las contradicciones económicas y sociales ya preexistentes. La economía china se contrajo un 6,8 por ciento en el primer trimestre, una caída mayor de la que estimaban diferentes consultoras internacionales. Se trata del primer retroceso del PBI desde que Beijing comenzó a informar datos trimestrales en 1992 -o sea, en casi treinta años.

La expectativa de una recuperación choca con la contracción severa de la economía mundial. Las exportaciones cayeron en marzo un 6,6 por ciento, después de desplomarse un 17,2 por ciento en enero y febrero. Al informar sobre su perspectiva a principios de esta semana, la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, dijo: “El resto de la economía mundial está ahora en manos de la pandemia y hay severas medidas de contención en todo el mundo para que eso tenga un gran impacto negativo en términos de demanda externa en el crecimiento de China”. Si bien muchas de las restricciones se han levantado, también se han promulgado otras nuevas, incluso en vuelos internacionales, con el fin de tratar de prevenir una segunda ola de infecciones. En el período reciente, el gobierno chino ha tratado de hacer que la economía esté más basada en el consumo interno. Sin

embargo, las ventas minoristas cayeron un 16 por ciento en marzo.

Esta vez, el gobierno no está en condiciones de apelar al enorme paquete de estímulo que puso en práctica en 2009, que comprendía un gasto público de alrededor de medio billón de dólares y una expansión del crédito, por un total equivalente al 16 por ciento del PBI. En términos porcentuales superó los rescates dispuestos por las principales potencias capitalistas, incluido Estados Unidos. En ese entonces, China ofició de locomotora de la economía mundial y su demanda fue la que estuvo en la base del aumento de los precios internacionales de los commodities y el período de bonanza experimentada por una serie de países de emergentes y latinoamericanos. Pero esto concluyó hace varios años y China ha sido arrastrada al torbellino de la crisis mundial, como lo prueba la brusca desaceleración que su economía viene experimentando. El régimen ha tratado de mantener en pie y evitar la quiebra de empresas, en especial de la órbita estatal, cuya continuidad está seriamente comprometida como consecuencia de la crisis de sobreproducción y sobreacumulación capitalista que afecta a todo el planeta, a través de un endeudamiento creciente que se ha vuelto una bomba de tiempo. La relación entre la deuda total y el PBI se expandió del 173 por ciento en 2008 a alrededor del 300 por ciento en 2019. Este financiamiento no ha servido para sacar del pantano al sector productivo y una parte creciente del mismo ha terminado siendo desviado a la especulación inmobiliaria -hasta el extremo de la creación de ciudades fantasmas-, burbujas bursátiles y activos financieros.

En consecuencia, el gobierno y el Banco Popular de China (PBoC) han dispuesto planes más modestos en comparación con los rescates anunciados en las grandes metrópolis. El gobierno ha dado algunas exenciones fiscales para las empresas y ha proporcionado fondos adicionales para que los bancos presten a las empresas en dificultades. La política monetaria se ha vuelto algo más flexible al reducir las tasas de interés de los préstamos.

Pero dado el estado de la economía mundial y el condicionante en la que entra China en esta coyuntura, es altamente dudoso que tales medidas sean capaces de revertir la declinación ya en desarrollo. Al sumo, se estima que el ritmo de crecimiento podría alcanzar un 1,5%, que, hablando de China, representaría un verdadero colapso.

El cuadro social

Esto ya está teniendo una traducción en el número de desocupados. Los empleos precisos y los datos de desempleo para China son algo vidriosos por la manipulación de las estadísticas y engañoso, ya que su fuerza laboral comprende trabajadores migrantes del país que no son registradas fielmente en los cómputos gubernamentales.

La tasa oficial de desempleo urbano se situó en un máximo histórico del 6,2 por ciento a finales de febrero, y cabe esperar que aumente aún más en los próximos meses, incluso si la economía vuelve a un crecimiento positivo. Por lo pronto, en los dos primeros meses de 2020, el país vio destruidos unos 5 millones de puestos de trabajo, en el marco de una fuerza laboral total de 900 millones de personas en edad de trabajar. El gobierno se enfrenta

a un problema importante para el número récord de graduados universitarios en la búsqueda de empleo que ahora llegan al mercado laboral. El régimen chino se fija el objetivo de proporcionar al menos 10 millones de empleos urbanos más cada año. Pero según Wang Tao, economista de UBS (sociedad suiza de servicios financieros), incluso cuando el mercado laboral se recupere, el empleo no agrícola caerá en 14 millones este año.

Esto puede poner en tela de juicio la “estabilidad social” que siempre ha sido materia de preocupación del Partido Comunista chino (PCCh) y, en especial ahora, pues el régimen de Xi es consciente que la continuidad en el tiempo de su mandato depende de ello, con más razón cuando el crecimiento, lejos de atenuar las desigualdades sociales, las ha potenciado. Y, a caballo de ellas, ha ido en aumento el clima de descontento y de hostilidad en las filas de los trabajadores.

Perspectivas

Este cuadro de situación obsesiona a la elite dirigente. Cada año, el PCCh anuncia -durante la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, que tiene lugar en marzo- su objetivo anual de crecimiento. Sin embargo, la reunión fue cancelada este año debido al coronavirus y, por ahora, las autoridades se han abstenido de aventurar sus pronósticos.

Lo cierto es que esta vez va a ser difícil que China pueda sustraerse a las quiebras de una franja de empresas, cuya viabilidad ha pasado a estar cuestionada por la bancarrota capitalista. “La contracción del PBI entre enero y marzo se traducirá en pérdidas permanentes de ingresos, que se reflejarán en quiebras de pequeñas empresas y pérdidas de empleos”, analizó Yue Su, de la Economist Intelligence Unit (*La Vanguardia*, 16/4). El país asiático se ha convertido en uno de los eslabones vulnerables y explosivos en esta nueva transición. De ser uno de los factores contrarrestantes de la crisis mundial, ha pasado a transformarse en una de las palancas de su agravamiento. Esto crea las condiciones para una intervención de mayor amplitud de la clase obrera china. Aunque con sus marchas y contramarchas, esta enorme fuerza laboral ya viene despabilándose estos últimos años, como lo prueban la multiplicación de huelgas y conflictos laborales. Su despertar definitivo augura un giro determinante en la lucha de clases mundial.

Pablo Heller